

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile -Ministerio de Educación- interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia adoptada en sesión ordinaria N°1380, de fecha 22 de agosto de 2023, que acogió el amparo deducido por don Rodolfo Meza Mesina en contra de la Resolución Exenta N°1180, de fecha 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría de Educación, que había denegado el acceso a la información pública solicitada.

Actuación que la recurrente considera ilegal, por cuanto, a su juicio, la revelación de las preguntas contenidas en los instrumentos de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos de Educación Física de enseñanza básica y media del año 2022, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Educación y los derechos de los demás docentes evaluados. Por estas razones, solicita que se acoja el presente reclamo de ilegalidad y, en su mérito, se deje sin efecto la decisión impugnada, declarando que la Subsecretaría de Educación actuó conforme a derecho al denegar el acceso a la información requerida.

Entre los antecedentes expuestos para fundar su reclamo, la recurrente relata que con fecha 19 de enero de 2023, don Rodolfo Meza Mesina solicitó a la Subsecretaría de Educación, a través del portal de transparencia, acceso a: *“(...) las preguntas cerradas de los instrumentos de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos de educación física de enseñanza básica y media del año 2022 y las pautas de corrección para revisar exhaustivamente, de acuerdo al derecho de la ley de transparencia como fue acogido anteriormente en mis amparos C8155-20 y C4482-22. solicito las rubricas utilizadas para la revisión de la evaluación docente de la asignatura de educación física y salud, de los tres módulos que tiene dicho instrumento del año 2022 y que incluya el insatisfactorio, básico, competente y destacado.”*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

La solicitud fue denegada por dicha Subsecretaría de Educación mediante Resolución Exenta N°1180, de fecha 2 de marzo de 2023, fundada en que la publicidad de dicha información afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, configurándose las causales de reserva previstas en el artículo 21 numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

Disconforme con dicha respuesta, el solicitante dedujo amparo el 3 de marzo ante el Consejo para la Transparencia, seguido con el Rol C2321-23, el que fue acogido, ordenando a la Subsecretaria la entrega de la información requerida, que cumpla con dicho requerimiento en un plazo no superior a 5 días hábiles bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia y que acredite la entrega de la información de conformidad a lo preceptuado en el artículo 17 de la ley en comento. Respecto de esta decisión es que se recurre de ilegalidad.

Para efectos de contextualizar su reclamación la recurrente, en primer lugar, expone que la normativa que crea el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente” contempla la aplicación de instrumentos evaluativos para verificar el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el conocimiento de las bases curriculares por parte de los docentes. Estos instrumentos son: a) Un examen de Evaluación de Conocimientos Específicos y Pedagógicos (ECEP) relacionado con la disciplina y nivel que imparte el docente. b) Un portafolio profesional que evalúa la práctica docente en el aula, considerando el contexto en que se desempeña.

Señala que el objetivo del sistema es medir y acreditar los conocimientos específicos y pedagógicos de los docentes para su progresión en la carrera docente, considerando también el resultado del portafolio y sus bienios. La correcta elaboración de los instrumentos evaluativos, como la ECEP, asegura la confiabilidad y comparabilidad de los resultados, utilizando preguntas estandarizadas y "preguntas anclas" que cumplen con estándares internacionales de validez y confiabilidad.

La revelación no planificada de estas preguntas comprometería el proceso evaluativo, afectando la igualdad de condiciones entre los docentes. El sistema requiere la reserva de preguntas para garantizar la calidad de las evaluaciones, ya



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

que su creación tiene un alto costo y se realiza mediante licitaciones trianuales. Liberar preguntas sin planificación pone en riesgo la disponibilidad de las pruebas futuras y afecta el avance profesional de los docentes. Más aun considerando la inminencia del proceso de evaluación docente 2023 y la imposibilidad material de generar nuevos instrumentos en tan corto plazo.

Como fundamentos de derecho, la recurrente invoca la concurrencia de las causales de reserva previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. La primera, por cuanto la revelación de las preguntas y pautas de evaluación afectaría gravemente el debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Educación en el proceso de evaluación docente, al comprometer la validez y comparabilidad de sus resultados. Y la segunda, porque la publicidad de los materiales evaluativos vulneraría la garantía de igualdad ante la ley de los docentes, al crear condiciones desiguales entre quienes tengan acceso previo al contenido de las pruebas y quienes no lo tengan. La divulgación de estas preguntas podría generar un sesgo a favor de quienes las conozcan con anticipación, comprometiendo la imparcialidad del proceso evaluativo. Esto afectaría directamente la progresión en la Carrera Docente, que está vinculada a mejoras salariales, perjudicando económicamente a aquellos docentes que no tengan acceso a dicha información y generando un escenario de inequidad en el sistema de evaluación.

Asimismo, alega la infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, aplicables supletoriamente a los procedimientos ante el Consejo para la Transparencia, que consagran los principios de objetividad, imparcialidad y fundamentación de las decisiones administrativas. Los que habrían sido vulnerados al no explicitarse en la decisión impugnada las razones por las cuales se desestimaron los argumentos de la Subsecretaría para denegar el acceso a la información solicitada.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente reclamo de ilegalidad y, en su mérito, se deje sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia, declarando que la Subsecretaría de Educación actuó conforme a derecho al denegar la información requerida.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

Segundo: Que, por resolución de 20 de octubre de 2023, la sala Tramitadora de este Tribunal, declaró inadmisibile la reclamación respecto de la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, dándole tramitación únicamente por la casual del numeral 2 del citado precepto.

Tercero: Que evacuando el informe solicitado, el Consejo para la Transparencia, luego de hacer una cronología de los hechos objeto de estos autos, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad deducido en su contra, y en lo pertinente a la causal admitida a tramitación, argumenta que para configurar la reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, no basta su mera invocación, sino que se debe acreditar que la publicidad de la información afecta derechos de terceros de manera presente o probable y con suficiente especificidad, siendo éstos bienes jurídicos protegidos por el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica.

En relación a la vulneración al derecho de igual ante la ley alegado por la recurrente indica que el reclamo de ilegalidad no logra justificar razonablemente cómo la publicidad de la información solicitada en el amparo Rol C2321-23, lesiona el derecho invocado del profesorado sometido a evaluación docente, considerando que el Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente comprende un proceso evaluativo integral, que busca reconocer la experiencia y consolidación de competencias y saberes de los docentes en las distintas etapas de su carrera, siendo imposible atribuir a la publicidad de un solo instrumento de evaluación la potencialidad de afectar la igualdad ante la ley de los profesionales de la educación.

En esta idea de integralidad de la evaluación docente, la evaluación de conocimientos específicos solicitada es solo uno de los aspectos evaluados en el proceso de categorización y es el propio Ministerio de Educación a través del ente experto el que debe adoptar los resguardos para la detección y corrección en caso de afectación de los derechos de quienes se someten al proceso evaluador.

Agrega que, en este caso, existe un claro interés público en acceder a la información solicitada, ya que permite el control social sobre el cumplimiento de las políticas públicas para mejorar la calidad de la educación a través del



desarrollo de la carrera docente. La evaluación docente es relevante tanto para los currículos de los profesionales como para la toma de decisiones públicas, lo que refuerza la importancia de la transparencia y justifica desestimar las causales de reserva invocadas.

Finalmente, el Consejo descarta haber incurrido en una falta de fundamentación de la decisión reclamada, habiendo dado cumplimiento a las exigencias de los artículos 33 letra b) de la Ley de Transparencia, 11 y 41 de la Ley N°19.880, al pronunciarse sobre todos los argumentos planteados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente.

Por estas razones, el Consejo para la Transparencia solicita a esta Corte tener por evacuado el informe, rechazando en todas sus partes el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de lo resuelto en la Decisión de Amparo Rol C2321-23.

Cuarto: Que cabe señalar que el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, reconoce como regla general y básica la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, pudiendo establecerse su secreto o reserva solo por ley de *quórum* calificado cuando dicha publicidad afecte la función de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De este principio constitucional resulta claro que para negar la publicidad y el acceso a la información pública, es imprescindible que se “afecte” alguno de los bienes jurídicos protegidos que la norma menciona.

Tal principio aparece ratificado por lo que dispone el artículo 5° de la Ley 20.285, en cuanto expresa: *“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado”*.

Quinto: Que la decisión impugnada por esta vía, corresponden a la adoptada en Sesión de 22 de agosto de 2023, que acogiendo el amparo deducido



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

contra la Subsecretaría de Educación, dispuso entregar al reclamante copia de las preguntas cerradas de los instrumentos de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos -ECEP-, de educación física de enseñanza básica y media del año 2022, incluidas las pautas de corrección; y, las rúbricas utilizadas para la revisión de la evaluación de la asignatura de educación física y salud de los tres módulos que tiene dicho instrumento, del año 2022, que incluya el insatisfactorio, básico, competente y destacado.

El reclamado señala que aplicó criterios contenidos en las decisiones de amparos Roles C1040-14, C3754-16, C1805-17, C4009-17, C3609-19, C4281-19, C8155-20, C7723-21, entre otras, donde se estableció que la evaluación de los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia.

Sexto: Que como segunda causal de reserva -la primera declarada inadmisibile- se esgrime por el reclamante la prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, es decir: *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*.

Se aduce que entregar las preguntas requeridas, que representan alrededor de un tercio del total de la evaluación (18 sobre 60), implicaría que los docentes que accedan a dicha información conocerán una parte importante de la prueba con que serán evaluados, lo que ciertamente afecta la utilidad del instrumento, pero, más aún, tiene consecuencias respecto al uso de los recursos públicos, en la medida que los resultados de la evaluación tendrán efecto directo en los tramos de la carrera en que quedarán encasillados los profesores evaluados y, por consiguiente, en sus remuneraciones. Agrega que conocer de antemano esa información implicará una ventaja respecto de los demás docentes que rendirán la evaluación en el mismo año, creando la posibilidad que accedan a tramos más altos de los que una evaluación equitativa podría generar, alterando el sistema de tramos y de mejoras remuneratorias que este produce, configurándose la causal



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

del artículo 21, N°2, de la Ley de Transparencia, por cuanto se afecta el derecho a la igualdad de los docentes en cuanto a ser evaluados en las mismas condiciones

Afirma, también, que se resulta aplicable a la materia la Ley N° 19.880 y, especialmente, el deber de motivación de las decisiones del Consejo para la Transparencia, señalando que se infringe la norma del artículo 33 lera b), así como lo dispuesto en los artículos 11 y 41, ya que no expresa de forma fundada, clara y precisa las razones por las cuales es procedente hacer entrega de la información solicitada.

Séptimo: Que en lo atinente a esta causal de reserva, el reclamante la sustenta en meras apreciaciones subjetivas respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el sistema de funcionamiento de la evaluación docente, por no haber finalizado la aplicación completa del instrumento, generando discriminación entre los docentes; sin embargo, no logra acreditar la afectación real y concreta que exige la causal invocada, pues se plantea en términos genéricos e hipotéticos, desatendiendo la naturaleza de los motivos de reserva de información, mediante la consagración de causales precisas y de interpretación restrictiva. En efecto, la finalidad de Ley N° 20.285 -a través de las normas que consagran la reserva de información pública- radica en que el Consejo para la Transparencia debe ponderar los costos que la publicidad de la información provocaría, es decir, si la afectación es superior al perjuicio que el secreto genera y, en el caso de la especie, si la entrega de la información afecta efectivamente *“los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”*, nada de lo cual se expresa en concreto en la acción de ilegalidad.

Octavo: Que a lo anterior se agrega que la reclamante no explica cómo el sistema de evaluación docente en su integridad dejaría de ser útil para los fines que fue creado. El reclamante no se refiere en concreto a la forma en que la entrega de la información solicitada -que corresponden solo a una parte de las herramientas diseñadas- vulneraría la asignación de tramos profesionales y las remuneraciones de los docentes que se sometan a evaluación una vez revelada ésta. En efecto, la argumentación se da en base a circunstancias meramente



hipotéticas, atendido a que podría ser usada en desmedro de terceros que no tengan acceso a ella, para lograr una mejor evaluación, en circunstancias que la causal invocada exige una mayor precisión en cuanto a la afectación real, como se desprende del tenor literal de la norma antes transcrita.

Asimismo, cabe consignar que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 K del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005, la medición de los estándares de desempeño se realiza mediante una serie de instrumentos, siendo la evaluación de conocimientos sólo uno de aquellos que se han predeterminado por la Administración para tal efecto, como política pública de fortalecimiento de la profesión docente.

Noveno: Que tampoco se advierte falta de motivación en la decisión cuestionada por cuanto se justifica tanto en lo fáctico como en lo jurídico la determinación adoptada, expresando el reclamado las razones por las cuales cada una de las alegaciones del ente público fueron desestimadas, dando cabal cumplimiento a las normas de la Ley N° 19.880, que el actor equivocadamente estima conculcadas.

Décimo: Que, conforme se viene razonando, al no verificarse las ilegalidades denunciadas por la reclamante, la acción debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Fisco de Chile, en representación de la Subsecretaría de Educación en contra de la Decisión de Amparo Rol C2321-23, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1380, de 22 de agosto de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

No firma la Ministra (s) señora Zúñiga, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Ingreso Corte N° 587 - 2023 Contencioso Administrativo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintitres de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintitres de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LMEEXQLRXSX